



O F I C I O

S/REF.: Expediente nº 00001-00083131

FECHA: 25 de octubre de 2023

ASUNTO: Movimientos sociales.

DESTINATARIO:

El día 17 de octubre de 2023 tuvo entrada en esta Dirección General solicitud de información efectuada por a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*"Solicito conocer el número total de policías infiltrados en **movimientos sociales** que ha habido cada año en nuestro país **desde 2010 a 2022**, ambos incluidos. Solicito el total anual sin ningún otro tipo de desglose, para evitar así la concurrencia de ningún límite. Conocer ese dato total no perjudica en ningún caso las investigaciones policiales, ya que no permite saber en qué momentos concretos ni movimientos ni zonas geográficas se han realizado las infiltraciones. Así lo ha entendido también el Consejo de Transparencia como ha dejado claro en su resolución 889-2023. No cabe, por tanto, ningún motivo para no cumplir y entregar lo solicitado. Hay que dar cumplimiento a los dictámenes de este organismo. Aclarar que con movimientos sociales me refiero a grupos organizados de la sociedad civil que no se pueden catalogar como sectas, grupos terroristas, redes de crimen organizado u organizaciones criminales."*

Una vez analizada la presente solicitud, este Centro Directivo ha resuelto **denegar** la información solicitada conforme al artículo **14.1.e)** de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, realizando las siguientes consideraciones sobre lo solicitado;

Se desconoce lo que el solicitante entiende exactamente por "*movimientos sociales de la sociedad civil **que no pueden catalogarse...***", por lo que contestar a dicha petición obligaría categorizar qué son y qué no son "movimientos sociales", resultando un dato impreciso e indeterminado sujeto a criterios de opinión y valoraciones subjetivas incompatibles con la posibilidad de dar una respuesta exacta y concreta. Ello supone una primera **imposibilidad material de ofrecer un dato con la rigurosidad y precisión** que requiere una contestación oficial a dicho requerimiento.

Añadida a esta imposibilidad material de ofrecer el dato solicitado, se debe tener presente que, en lo que respecta al **agente encubierto**, éste viene regulado en el **artículo 282 bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal**, siendo una forma de trabajo poco habitual en la Policía Nacional, por los riesgos intrínsecos que conlleva. Son estos riesgos, los que determinan que la información sobre los mismos tenga un **acceso restringido incluso dentro de la propia Policía Nacional**, lo que es congruente con el hecho de que la habilitación para ser un

agente infiltrado, deba ser otorgada por el Juez de Instrucción, o el Ministerio Fiscal, siendo reservada y debiendo conservarse fuera de las actuaciones judiciales con la debida seguridad.

Facilitar, por tanto, el número de funcionarios policiales que por distintos motivos puedan estar, o hayan estado, infiltrados, no sólo puede poner en **peligro la integridad física** de los mismos, como ya se ha hecho constar, sino que **perjudica la prevención e investigación de ilícitos penales**, al poner sobre el papel la frecuencia en el uso de esta técnica de investigación policial; porque **no es lo mismo saber que existen agentes infiltrados, que saber el número de ellos que, efectivamente, trabajan, o han trabajado, bajo identidad supuesta.**

Asimismo, esta información está protegida por los **acuerdos del Consejo de Ministros por los que se clasifican determinados asuntos y materias como SECRETO, con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales**, en concreto, el del 16 de febrero de 1996, por el que se otorga con carácter genérico la clasificación de SECRETO a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la **lucha antiterrorista** por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas, y el del 6 de junio de 2014, en el que se otorga, con carácter genérico, la clasificación de SECRETO a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la **delincuencia organizada** por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas. Y, sin duda, el primer elemento que se incluye en el secreto que opera sobre esta estructura, organización y medios es el número de agentes que pudieran formar parte de esta estructura, organización y medios.

En esta misma línea, la **Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial**, dispone en su **artículo 236 septies 2**: *"En todo caso se denegará el acceso a los datos objeto de tratamiento con fines jurisdiccionales cuando las diligencias procesales en que se haya recabado la información sean o hayan sido declaradas secretas o reservadas"*.

Por tanto, este Centro Directivo, manifiesta, por un lado, la **imposibilidad material de dar esta información** no pudiendo ofrecer un dato concreto y exacto que responda con precisión a lo solicitado. Además, reitera que el **agente infiltrado es una técnica de investigación policial regulada legislativamente, con control judicial, y con acceso muy restringido** a cualquier dato sobre la misma, por las consecuencias que su difusión puede acarrear, tanto en la integridad física de los policías que pudieran trabajar de esa forma, como en la efectividad de la medida, por lo que, su protección se considera por encima del derecho a la información invocado, debiendo aplicarse el límite al derecho de acceso previsto en el artículo 14.1 de la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su apartado e) al suponer un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL/DE LA POLICÍA

Francisco Pardo Piqueras

